



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general
9 de noviembre de 2016
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

110º período de sesiones

Acta resumida de la 3044ª sesión

Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el jueves 13 de marzo de 2014, a las 15.00 horas

Presidente: Sir Nigel Rodley

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (*continuación*)

Cuarto informe periódico de los Estados Unidos de América

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.5106, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.14-52199 (S) 230916 091116



* 1 4 5 2 1 9 9 *

Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto *(continuación)*

Cuarto informe periódico de los Estados Unidos de América (CCPR/C/USA/4; CCPR/C/USA/Q/4 y Add.1)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de los Estados Unidos de América toma asiento a la mesa del Comité.*

2. **La Sra. McLeod** (Estados Unidos), que presenta a su delegación, dice que la protección de los derechos civiles y políticos es algo más que un conjunto de requisitos legales; es un elemento fundamental de la identidad cultural de los Estados Unidos y se ha desarrollado a todo lo largo de la historia de la nación. La red de instituciones federales, estatales y locales de los Estados Unidos controla el Gobierno y asegura la existencia de medios de reparación cuando se producen violaciones de derechos. La sociedad civil de los Estados Unidos es activa, como demuestra el elevado número de informes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que se presentan al Comité.

3. **El Sr. Austin** (Estados Unidos) dice que, a lo largo de toda la historia del país, el pueblo estadounidense ha tratado de hacer realidad la promesa de la Constitución relativa a la igualdad de oportunidades y la justicia igual para todos. El derecho de voto es la piedra angular de la democracia. Teniendo esto en cuenta, recientemente se han adoptado medidas para bloquear la aplicación de leyes excesivamente restrictivas respecto de la identificación de votantes en los estados de Texas y Carolina del Norte. La igualdad de acceso a la educación es fundamental para fortalecer la democracia. El Departamento de Justicia sigue aplicando leyes federales para ofrecer más oportunidades a todos los alumnos y protegerlos de la discriminación por motivos de raza, origen nacional, sexo, idioma, religión y discapacidad. Entornos educativos diversos preparan a los estudiantes para alcanzar el éxito en una nación igualmente diversa.

4. Los prestatarios que reúnan ciertas condiciones merecen la igualdad de acceso a préstamos equitativos y responsables; desde su creación en 2010, la Unidad de Concesión de Préstamos Equitativos de la División de Derechos Civiles ha organizado la concesión de indemnizaciones pecuniarias a los prestatarios y las comunidades afectadas por préstamos discriminatorios. El acceso a la justicia es otro elemento fundamental de la democracia. A este respecto, recientemente se ha establecido una colaboración con más de 15 estados para que los tribunales estatales faciliten el acceso a sus servicios a personas con conocimientos limitados del idioma inglés. Se ha hecho todo lo posible para que los departamentos de policía protejan los derechos civiles y constitucionales de la comunidad. En casos de abuso de poder, el Departamento de Justicia aplicará la reforma y exigirá que las personas rindan cuentas de sus actos con arreglo al derecho penal. En los últimos años, esas reformas han abordado cuestiones tales como el uso excesivo de la fuerza, los controles, registros y detenciones ilícitos y las políticas que entrañen una discriminación ilícita de mujeres o grupos de minorías protegidas.

5. Se han realizado esfuerzos constantes para prevenir, detectar y responder a los abusos en las instituciones de detención. Hace poco se determinó que el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Pennsylvania había vulnerado los derechos que asisten a los reclusos en virtud de la octava enmienda de la Constitución y de la Ley de Personas con Discapacidad de los Estados Unidos, por su uso excesivo del régimen de aislamiento para reclusos con enfermedades mentales graves. Se combaten las desigualdades raciales y étnicas a todos los niveles del sistema judicial, en particular en lo relativo a las sentencias penales. Se han logrado avances considerables en la reducción de la violencia contra la mujer y, en particular, contra las nativas americanas.

6. **La Sra. McLeod** (Estados Unidos), resumiendo oralmente las respuestas escritas de su Gobierno a la lista de cuestiones del Comité (CCPR/C/USA/Q/4/Add.1), dice que los Estados Unidos siguen creyendo que su interpretación de la aplicabilidad del Pacto —a las personas que se hallen en el territorio del Estado parte o bajo su jurisdicción— es compatible con el texto del Pacto y los antecedentes de su negociación. Las reservas de los Estados Unidos a las disposiciones del Pacto se han elaborado en estrecha cooperación con el Senado, y el Estado parte no tiene previsto retirarlas.

7. La oradora destaca los esfuerzos para remediar las disparidades raciales injustificadas en el sistema de justicia penal y combatir la caracterización racial. Se ha aprobado un plan estratégico para poner fin a la falta de vivienda, que incluye medidas destinadas a encontrar alternativas a la criminalización de las personas sin hogar. En lo que respecta a los servicios de atención de la salud y educación, la oradora afirma que todas las personas que se encuentran en los Estados Unidos, incluidos los migrantes en situación irregular, tienen derecho a servicios sanitarios de urgencia. En muchos estados, los estudiantes que se encuentran en el país en situación irregular pueden matricularse en la enseñanza pública pagando los gastos de matrícula como no residentes en el estado. En los últimos diez años, el número de estados que mantienen la pena de muerte ha disminuido, así como la cifra de personas ejecutadas cada año y el número de presos en los corredores de la muerte.

8. Los Estados Unidos están en conflicto armado con Al-Qaida, los talibanes y sus aliados, y pueden recurrir a la fuerza en virtud de su derecho inmanente de legítima defensa nacional. Los ataques selectivos realizados con aeronaves teledirigidas son conformes con todas las leyes nacionales e internacionales aplicables. Se ha prohibido la práctica de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a todos los funcionarios, y se llevan a cabo investigaciones rápidas e independientes respecto de las denuncias verosímiles de malos tratos a los detenidos. La práctica del simulacro de ahogamiento (*waterboarding*) está explícitamente prohibida en los manuales de campaña del ejército. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo Especial sobre Políticas de Interrogatorios y Traslado se están llevando a la práctica. El uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios es investigado y enjuiciado. Todos los funcionarios o agentes gubernamentales de los que se determine que han abusado de su autoridad mientras patrullaban la frontera con México deberán rendir cuentas de sus actos.

9. La disciplina en las escuelas está regulada por leyes y prácticas locales y estatales; 31 de los 50 estados han prohibido el castigo corporal en las escuelas. En los centros de privación de libertad no puede imponerse un régimen de aislamiento a ningún detenido si no va precedido de una audiencia administrativa o si no se observan otros procedimientos destinados a proteger su derecho a las debidas garantías procesales. Se hace todo lo posible para proteger a los detenidos contra la violencia, en particular contra el abuso sexual. A principios de marzo de 2014, el Departamento de Seguridad Nacional publicó el reglamento de aplicación de la Ley de Eliminación de la Violación en las Instituciones Penitenciarias. Se están haciendo gestiones para cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo; los Estados Unidos están autorizados legalmente a retener a los detenidos de Guantánamo hasta el fin de las hostilidades, pero prefieren no retenerlos más tiempo del que sea absolutamente necesario. Se procura que los menores de 18 años detenidos en el Iraq, el Afganistán y Guantánamo estén separados de los reclusos adultos, que puedan hacer llamadas telefónicas a sus familiares, y que reciban la atención física y psicológica que necesitan.

10. Los menores que infrinjan la ley en los Estados Unidos no serán recluidos en centros de detención para adultos ni tendrán contacto periódico con estos. En cuanto a los niños extranjeros no acompañados, si no reúnen las condiciones para el retorno voluntario permanecerán bajo custodia en el entorno menos restrictivo posible, teniendo en cuenta el

interés superior del niño. Se hace todo lo posible para preservar la unidad familiar. Se ha adoptado un enfoque coordinado para hacer frente a la violencia doméstica, que combina elementos tales como el cumplimiento de la ley, el ordenamiento jurídico, y los profesionales del derecho y de la salud. Se han hecho esfuerzos concertados para investigar y enjuiciar los casos de trata de personas, con especial atención a la investigación de la pornografía infantil y el turismo sexual.

11. Las actividades de vigilancia del Organismo Nacional de Seguridad están muy supervisadas. En 2013 se hizo un examen de la inteligencia de señales de los Estados Unidos; se analizó la manera en que el país puede utilizar sus servicios de inteligencia para optimizar la protección de la seguridad nacional, al tiempo que se respetan la privacidad y las libertades civiles, se preserva la confianza pública, se respalda la política exterior de los Estados Unidos y se reduce el riesgo de que se produzcan divulgaciones no autorizadas.

12. Por último, los Estados Unidos reconocen la importancia de comprender aquellos aspectos de significado espiritual o cultural para las comunidades indígenas del país. A este respecto, la Oficina del Presidente ha publicado recientemente un informe sobre la marcha de los trabajos de la Conferencia de la Casa Blanca sobre las Naciones Tribales de 2013, en el que se abordan cuestiones tales como la protección de las tierras indígenas de los Estados Unidos, el medio ambiente y el respeto de los derechos culturales.

13. **El Sr. Kälén**, refiriéndose a la aplicabilidad del Pacto, afirma que varios de los problemas que se plantean en la lista de cuestiones del Comité (CCPR/C/USA/Q/4) se derivan de tres hechos principales, a saber, que los Estados Unidos no aceptan la aplicabilidad extraterritorial del Pacto, que las posibilidades del Gobierno federal para garantizar la aplicación del Pacto a nivel estatal y local son limitadas, y que en el momento de la ratificación del Pacto se declaró que sus disposiciones no eran de aplicación directa. Esos hechos limitan el alcance jurídico y la pertinencia práctica del Pacto en el Estado parte. El orador pregunta si la delegación está de acuerdo en que el proceso de redacción del artículo 2, párrafo 1, es, en el mejor de los casos, inconcluyente, y que la redacción del párrafo es lo bastante abierta para permitir una interpretación favorable a la aplicabilidad extraterritorial del Pacto. El orador se pregunta si no sería contrario al objeto y la finalidad del Pacto sugerir que esa cláusula faculta a los Estados partes a cometer violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, salvo en su propio territorio. Pregunta, además, si el Gobierno de los Estados Unidos consideraría la posibilidad de revisar su postura sobre la no aplicabilidad del Pacto y propone que esa revisión abra un debate sobre el verdadero significado de jurisdicción en situaciones extraterritoriales y sobre los límites legítimos de la aplicación extraterritorial del Pacto.

14. En lo que respecta a la cuestión del federalismo y a la aplicación del Pacto a nivel federal, estatal y municipal, el orador pregunta si realmente el hecho de que el Pacto no sea de aplicación directa en el Estado parte significa que el Gobierno no tiene la posibilidad de exigir su aplicación a nivel estatal y local, aunque las violaciones del Pacto en esos niveles sean imputables a los Estados Unidos a tenor del derecho internacional. El orador pregunta cómo se está resolviendo este problema y si se ha adoptado alguna medida para establecer mecanismos eficaces que mejoren la supervisión de las acciones estatales, y velen por que las leyes de los estados se ajusten a los tratados correspondientes, y se ofrezca a las víctimas mecanismos de reparación eficaces. Habida cuenta de que el Pacto no es de aplicación directa, el orador desea saber qué recursos existen para resolver las violaciones del Pacto que no sean infracciones del derecho interno. Se pregunta si se han examinado las leyes vigentes para individuar estas situaciones y resolverlas. Desea saber cómo informará la delegación a las autoridades estatales y locales y a la sociedad de su diálogo con el Comité.

15. En cuanto a la cuestión de la criminalización de las personas sin hogar, el orador celebra que el Estado parte reconozca la necesidad de buscar soluciones. En particular, acoge con agrado las medidas adoptadas por el United States Interagency Council on Homelessness (Consejo Interinstitucional de los Estados Unidos para las Personas sin Hogar), aunque le preocupa que esos esfuerzos puedan no ser suficientes. El orador agradecería recibir información más detallada sobre las medidas concretas adoptadas para evitar la criminalización de las personas sin hogar, y sobre las repercusiones de esas medidas. También querría saber si se ha alentado a las autoridades locales a que revisen las normas relativas a la criminalización o si las actividades consistieron solamente en campañas de sensibilización.

16. El Comité celebra que un número creciente de estados estén aboliendo la pena de muerte. Es particularmente preocupante observar que desde 1973 ha habido 144 casos de exculpación de personas que habían sido condenadas a muerte injustamente. El orador pregunta qué hará el Gobierno federal para asegurar de manera efectiva que la imposición de la pena de muerte no obedezca a prejuicios raciales. También pregunta en qué medida la iniciativa de acceso a la justicia del Departamento de Justicia resuelve el problema de la representación letrada de los litigantes en causas civiles relacionadas con la pena de muerte. El orador expresa su preocupación por la falta de pruebas de control de calidad de las sustancias letales administradas en las ejecuciones, que se ha constatado que causan un sufrimiento prolongado al reo antes de su muerte. Desea saber cómo se propone el Gobierno impedir el uso en las ejecuciones de fármacos que no hayan sido autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Refiriéndose a dos ejecuciones previstas en Mississippi, pregunta por qué no se ha publicado información sobre la fuente, el tipo y la fecha de caducidad de los fármacos que van a utilizarse y sobre cómo van a prepararse dichos fármacos para las ejecuciones. Sin esa información, los dos presos condenados a muerte no pueden fundamentar sus alegaciones de que el uso del fármaco generaría sufrimientos equivalentes a un trato cruel e inhumano. El orador pregunta si, dado que muchos acusados de delitos castigados con la pena de muerte no han estado bien representados en el juicio, en el proceso de apelación y después de la condena, el Estado de Mississippi confía en que no va a ejecutar a otra persona inocente.

17. Aunque aprecia la postura del Presidente Obama, favorable a combatir la violencia con armas de fuego, hacen falta otras muchas acciones en este sentido. El orador pregunta qué medidas tiene previsto adoptar el Estado parte para cumplir más eficazmente las obligaciones contraídas en virtud del artículo 6 del Pacto, incluso en el contexto de la delincuencia, y para aplicar más eficientemente la Enmienda Lautenberg de 1996 a la Ley de Control de Armas de 1968. Pregunta, además, si la delegación comparte la opinión de que las leyes que estipulan la defensa propia sin limitaciones (*stand your ground laws*) son incompatibles con la obligación de proteger la vida que se contempla en el artículo 6 del Pacto, y se pregunta cómo piensa el Gobierno garantizar que los estados ajusten sus leyes al Pacto en ese aspecto.

18. El orador pregunta si se investigan todos los casos de uso letal de la fuerza por parte de agentes del orden, ya sea inmediatamente después de la muerte de la víctima o más tarde, si aparecen nuevas pruebas. Por último, pregunta si los estados están obligados a informar a una instancia federal de todas las muertes que se producen como consecuencia de los disparos de agentes de policía, y si se proyecta investigar los casos de conducta policial indebida, como por ejemplo el del Departamento de Policía de Chicago.

19. **El Sr. Iwasawa** pregunta si el Estado parte considera que no necesita una institución única nacional independiente de derechos humanos que se ajuste a los Principios de París, e invita a la delegación a que formule observaciones sobre la propuesta de que la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos sea esta institución. Aunque es importante, la existencia de un poder judicial independiente, no es el remedio de todos los males sociales;

las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel destacado a este respecto.

20. El orador observa que los Estados Unidos han introducido más reservas, interpretaciones y declaraciones en el Pacto que cualquier otro Estado parte, y lamenta profundamente que no tengan previsto revisarlas o retirarlas. Las reservas a los artículos 6 y 7 del Pacto son especialmente controvertidas. El orador pregunta por qué el Estado parte cree que su primera interpretación del Pacto sigue siendo necesaria, y lamenta que haya declarado que el Pacto no es de aplicación directa. En sus observaciones finales sobre el informe inicial del Estado parte (CCPR/C/79/Add.50), el Comité señaló que, a su juicio, las reservas, declaraciones e interpretaciones del Pacto, en su conjunto, tenían como objetivo lograr que los Estados Unidos aceptasen únicamente lo que ya se hallaba reflejado en su legislación, y expresó su especial preocupación por las reservas relativas al artículo 6, párrafo 5, y al artículo 7 del Pacto, que consideraba incompatibles con el objetivo y la finalidad de este. Solicita a la delegación que comente estas observaciones.

21. El orador acoge con satisfacción las medidas adoptadas para reducir las disparidades raciales en el sistema de justicia penal y pide información actualizada sobre los progresos realizados en la reforma de las disposiciones legislativas sobre la imposición de condenas mínimas obligatorias, la realización de análisis estadísticos de las disparidades en la imposición de condenas y la aplicación de las recomendaciones formuladas en el informe de 2011 de la Comisión de Condenas de los Estados Unidos. Desea recibir más información sobre el mecanismo que permite al Fiscal General interponer acciones civiles para eliminar ciertas pautas o prácticas de conducta indebida de los agentes del orden, y sobre cómo se ha utilizado ese mecanismo en la práctica.

22. El orador pregunta cuándo se completará el examen de las directrices sobre la utilización de criterios basados en la raza por los órganos de policía federales, y pide información sobre las prácticas de vigilancia de los musulmanes en el Estado parte y su justificación. El orador desearía disponer de una evaluación de la eficacia de la formación impartida a los agentes del orden público sobre la concienciación cultural y las mejores prácticas de participación comunitaria. Tras la sentencia del Tribunal Federal que estableció que los agentes de policía de Nueva York empleaban la caracterización racial y la práctica de cacheos aleatorios llamada “*stop and frisk*” (parar y registrar), el orador desea saber si el Departamento de Justicia opina que esas prácticas infringen la ley. Pide a la delegación que comente la afirmación de que las políticas de control de la inmigración suelen generar discriminación racial y caracterización racial. Por último, el orador pregunta qué va a hacer el Estado parte respecto del aumento de la segregación racial en las escuelas, las elevadas tasas de abandono escolar entre los grupos minoritarios y las crecientes disparidades en la financiación de las escuelas que tienen alumnos de distintas razas.

23. **El Sr. Shany** expresa su preocupación por el hecho de que los migrantes en situación irregular estén excluidos de la cobertura de la Ley de Atención Asequible y quiere saber cuál es la justificación jurídica de esta exclusión. Desearía conocer la opinión de la delegación sobre la compatibilidad de las disposiciones de esta Ley con los artículos 2 y 26 del Pacto. Solicita aclaraciones sobre la persistencia de una opción que permite a los estados excluir a los inmigrantes documentados no cualificados de la cobertura completa del Medicaid y su programa de seguro médico infantil, y pregunta a la delegación si cree que esta distinción entre distintos grupos de inmigrantes documentados es razonable y proporcional. Desea saber cómo se justifica la distinción entre los pacientes migrantes que necesitan tratamientos de urgencia y los que necesitan tratamientos para enfermedades crónicas y otros problemas graves de la salud, y pregunta cómo podría considerarse esa distinción razonable y proporcional.

24. El orador solicita información sobre la situación jurídica actual de la Ley HB2008 del estado de Arizona y las medidas adoptadas por el Gobierno federal para evitar que los

estados creen un efecto disuasorio, al exigir a los hospitales que consideren la situación de los pacientes en materia de inmigración o que los denuncien si carecen de documentación o si su pertenencia a la seguridad social no está regularizada. El orador desea saber qué ha sucedido con las directrices formuladas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos en 2000 que parecían prohibir tales prácticas. Según los informes de las ONG, ha habido centenares de expulsiones y tentativas de expulsión de inmigrantes indocumentados, directamente desde los hospitales estatales. Pregunta qué medidas está tomando el Gobierno federal para frenar esas prácticas.

25. El orador desea saber cuál es la postura del Gobierno federal sobre ciertas leyes estatales, como la promulgada en Alabama, que exige a las instituciones educativas que se informen de la situación de los niños en materia de inmigración, o las promulgadas en Arizona, Georgia e Indiana, que impiden a los niños inmigrantes indocumentados beneficiarse de las tasas de matriculación que se aplican a los residentes en esos estados, o leyes tales como las aprobadas en Carolina del Sur y Alabama, que prohíben taxativamente la matriculación de estos niños en instituciones estatales de educación secundaria. Pregunta si el Estado parte reconoce su obligación positiva de proteger a los niños indocumentados contra las discriminaciones practicadas por las autoridades estatales en el ámbito de la educación.

26. El uso de la fuerza letal contra los sospechosos de terrorismo debe limitarse a circunstancias extraordinarias que entrañen un peligro inminente para la vida humana o encajen en la definición de “conflicto armado”. El orador desea saber qué piensa el Estado parte acerca de su enfoque abierto de la definición de “conflicto armado” y su actitud poco clara respecto de la necesidad de un vínculo entre cualquier uso particular de fuerza letal y cualquier escenario específico de hostilidades. El orador pregunta de qué mecanismos de supervisión independientes o interinstitucionales se dispone para verificar que se apliquen políticas destinadas a garantizar la correcta identificación de las personas que serán blanco de ataques con aeronaves no tripuladas, y que se adopten las precauciones adecuadas para evitar daños colaterales. Pregunta en qué medida la práctica de los “ataques por perfil” (*signature strikes*) dirigidos contra personas desconocidas es acorde con la política del Estado de conseguir la certeza casi absoluta de que no habrá daños colaterales, y pide a la delegación que dé explicaciones sobre las preocupaciones acerca de los efectos adversos de los ataques *double-tap* (atacar el mismo objetivo dos veces seguidas) para la seguridad de los rescatadores civiles.

27. El orador pide a la delegación que confirme o niegue la afirmación de que todos los varones en edad militar de las zonas de ataque se contabilizan como combatientes al evaluar los daños colaterales, y desea saber si el Estado parte considerará la posibilidad de revelar públicamente información sobre cada uno de sus ataques selectivos o por perfil. El orador desearía saber qué mecanismos de rendición de cuentas se han establecido para las víctimas de ataques con aeronaves no tripuladas que no hayan sido indemnizadas por sus Gobiernos. El Comité sigue estando preocupado por que no se haya enjuiciado a ningún mando militar, ni siquiera en los casos clasificados como presuntos homicidios, y por la falta de disposiciones amplias sobre la responsabilidad de los mandos en el derecho penal federal. El orador pregunta si el Estado parte ha abordado las preocupaciones expresadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre el uso de la fuerza letal contra los migrantes indocumentados que cruzan la frontera entre los Estados Unidos y México, y desearía conocer el número de investigaciones y enjuiciamientos resultantes de esas muertes.

28. El orador pregunta si, además de David Passaro, se ha juzgado y condenado a alguna otra persona por torturas en ocasión de los interrogatorios realizados durante la guerra contra el terrorismo. Refiriéndose en particular a los “memorandos sobre la tortura” (*torture memos*), se pregunta cómo concilia el Estado parte su obligación de proteger y proporcionar

una reparación efectiva a las víctimas de la tortura con su práctica de eximir prácticamente de responsabilidad a todos los participantes en lo que parece ser una asociación dedicada a cometer violaciones generalizadas y sistemáticas del artículo 7 del Pacto. El orador desea conocer la opinión de la delegación sobre la compatibilidad con el Pacto de los numerosos obstáculos que impiden a las presuntas víctimas de torturas obtener reparación por conducto de los tribunales nacionales. Pregunta por qué el informe de la Comisión Especial de Inteligencia del Senado sobre el programa de detenciones e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sigue estando reservado. Por último, el orador insta al Estado parte a que reconsidere su actitud con respecto a la ausencia de una legislación amplia que prohíba la tortura en su territorio.

29. **El Sr. Rodríguez Rescia** solicita más información sobre la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Políticas de Interrogatorios y Traslados, en particular en lo que respecta a los interrogatorios. Habida cuenta de que las investigaciones de detenidos de alto valor fuera de los Estados Unidos se rigen por normas especiales, y que la información a este respecto es reservada, el orador desearía saber cómo se asegura el Estado parte de que se cumplan las garantías procesales recogidas en el artículo 14 del Pacto durante el interrogatorio y el traslado de esos detenidos. Al parecer, el Estado parte no ha aplicado las recomendaciones de numerosos órganos de derechos humanos regionales e internacionales y titulares de mandatos de los procedimientos especiales en relación con las técnicas de interrogatorio que utiliza.

30. El orador pregunta si el Estado parte hará público un informe elaborado por la Comisión Especial de Inteligencia del Senado en 2012 sobre los interrogatorios realizados por funcionarios estadounidenses. En un informe publicado en 2011 por el Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Políticas de Interrogatorios y Traslados, se indicaba que las oficinas del Inspector General y el Departamento de Estado habían recopilado informes anuales sobre personas trasladadas a otros Estados. ¿Se han recopilado informes de ese tipo desde 2011? ¿Son de dominio público? El orador pregunta qué procedimientos se han seguido para trasladar a personas desde la cárcel de la Bahía de Guantánamo a otros Estados, y cómo verifica el Estado parte la suerte que han corrido estas personas. ¿Pueden las garantías diplomáticas garantizar realmente que una persona que es enviada a otro país no corre el peligro de ser torturada? El orador pregunta si el Estado parte tiene en cuenta los antecedentes del país en materia de derechos humanos. Pregunta también si ha habido casos de personas expulsadas por los Estados Unidos a otros países que después hayan sido presuntamente torturadas y, de ser así, si las denuncias se han investigado y con qué resultados. Desea saber además si, de haberse registrado esos casos, los interesados han recibido algún tipo de reparación.

31. El orador pregunta qué medidas ha adoptado el Estado parte para que Djamel Ameziane y otra persona, enviados de Guantánamo a Argelia en diciembre de 2013, no sean objeto de tratos inhumanos. El Estado parte hizo caso omiso de una solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Sr. Ameziane. Se ha informado al Comité de que Ahmed Belbacha está a punto de ser trasladado de Guantánamo a Argelia. ¿Cómo se comprobará lo que hagan con él?

32. **La Sra. Majodina** dice que al Comité le sigue preocupando la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden público, en particular contra personas afroamericanas o de ascendencia latinoamericana y migrantes en situación irregular que intentan cruzar la frontera desde México. Según informan los periódicos, no se ha inculpado a ningún funcionario por las 42 muertes en incidentes sobrevenidos en la frontera con México, contabilizadas desde 2005. Esas muertes son contrarias a la política del Estado parte sobre el uso de la fuerza letal, según la cual un agente de policía solo puede hacer uso de la fuerza letal cuando la persona contra la que vaya a emplearla amenace de manera

inminente con causar daños graves o la muerte al agente o a otras personas. La oradora desea saber si existen disposiciones oficiales que regulen el uso de la fuerza por las patrullas fronterizas y, de ser así, cuáles son. Pide detalles sobre la formación recibida por los miembros de las patrullas fronterizas, y desea saber si se llevan estadísticas sobre el uso de la fuerza y si el Estado parte tiene el propósito de hacer que el uso de armas de fuego por agentes del orden de ajuste a los principios fundamentales de las Naciones Unidas. Pregunta qué mecanismos de supervisión e indemnización se están organizando para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos que se derivan del uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden. Considerando que desde 2001 más de 60 muertes en el Estado parte han sido debidas al uso de dispositivos de descarga eléctrica, incluso en centros de detención, la oradora pregunta qué se hace para poner freno a esta práctica aparentemente indiscriminada.

33. **La Sra. Chanut** solicita información sobre las leyes que prevén la defensa propia sin limitaciones (*stand your ground laws*), vigentes en muchos estados del Estado parte. Teniendo en cuenta de que el jurado se declaró incapaz de condenar al guardia de seguridad privada acusado de matar a tiros a en Florida, en 2012, a Trayvon Martin, un varón desarmado de 17 años, la oradora pregunta si el Estado parte proyecta enmendar esas leyes para adaptarlas a lo dispuesto en el artículo 6 del Pacto.

34. **El Sr. Salvioli** dice que, teniendo en cuenta que recientemente se ejecutó a un recluso condenado a muerte en el estado de Texas pese a la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de que el juicio no había sido imparcial, cabe preguntarse qué hace el Estado parte para que los estados respeten las decisiones de la Comisión, cuya labor supuestamente apoyan los Estados Unidos, en ese tipo de situaciones.

35. **El Presidente**, hablando en calidad de miembro del Comité, pregunta si el Estado parte sopesa la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto, reconociendo la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos. En referencia a las preguntas del Sr. Shany sobre varias leyes estatales, señala que debería considerarse la responsabilidad penal de los profesionales del derecho que emitieron dictámenes jurídicos profundamente viciados, que sirvieron de base para la comisión de graves delitos.

Se suspende la sesión a las 17.20 horas y se reanuda a las 17.40 horas.

36. **La Sra. McLeod** (Estados Unidos) dice que la posición del Estado parte con respecto a la aplicación territorial del Pacto, según se establece en el artículo 2, párrafo 1, no ha cambiado. Las acciones del Estado parte y de sus funcionarios fuera de su territorio se basan en su compromiso con el estado de derecho y el principio de no discriminación, el respeto de las garantías procesales, la protección en condiciones de igualdad, y la protección de la vida y la dignidad humanas. Se han tomado muchas medidas para impedir la práctica de la tortura por funcionarios de los Estados Unidos. El Decreto Presidencial núm. 13491 de Garantía de Interrogatorios Legales, de 22 de enero de 2009, dispone que las personas detenidas en cualquier conflicto armado serán tratadas con humanidad y no serán objeto de violencias contra la vida y la persona (incluidas todas las formas de homicidio, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura) ni de ultrajes contra la dignidad personal (en particular, los tratos humillantes y degradantes), cuando se encuentren bajo la custodia de funcionarios de los Estados Unidos. Por ejemplo, la Ley de Trato de los Detenidos de 2005 establece que “ninguna persona bajo la custodia o el control físico del Gobierno de los Estados Unidos será objeto de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de su nacionalidad o del lugar físico en que se encuentre”. Las condiciones del tratado son aplicables en todo momento y lugar, no solo en el territorio del Estado parte. Es una cuestión de política que nadie pueda ser expulsado por la fuerza a otro país donde exista la probabilidad de que sufra torturas o tratos crueles.

37. **El Sr. Washburn** (Estados Unidos) afirma que en los últimos cinco años se han construido más de 50.000 viviendas en su país. El Gobierno federal opina que la criminalización no es la solución del problema de la falta de vivienda, y el Interagency Council on Homelessness (Consejo Interinstitucional para las Personas sin Hogar) está examinando varios métodos para resolverlo, como la mejora de la colaboración entre los organismos encargados de la vivienda y los servicios sociales, y entre los organismos del orden público y los proveedores de servicios sociales. Los agentes de policía necesitan una mejor formación especializada para tratar a las personas desprovistas de hogar como personas que necesitan asistencia social y no como delincuentes. Deben proporcionarse servicios de reinserción para los expresidarios, que suelen ser quienes corren más riesgo de quedarse sin hogar. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano invierte más de 650 millones de dólares estadounidenses al año en viviendas para las comunidades indias nativas.

38. **El Sr. Becker** (Estados Unidos) dice que la Administración de Salt Lake City, ciudad de la que es alcalde, aplica activamente un programa de derechos humanos. Los adultos que convivan en la misma residencia pueden inscribirse en el Registro de Compromiso Mutuo para declarar su relación de apoyo mutuo. El estado de Utah legalizó el matrimonio homosexual en diciembre de 2013. Desde que en 2006 la ciudad emprendió un plan para solucionar el problema de la falta de vivienda, hasta 2016, el número de personas sin hogar se ha reducido en un 75%. El Presidente Obama puso en marcha una iniciativa para resolver el problema de la falta de vivienda de los veteranos de guerra. Ese objetivo se ha alcanzado en Salt Lake City, y otras ciudades del Estado parte también están en vías de conseguirlo. El Gobierno federal ha proporcionado fondos y asistencia técnica, y la clave del éxito ha sido la cooperación a todos los niveles de gobierno.

39. **El Sr. Swartz** (Estados Unidos) dice que en la última década se ha reducido el número de estados que aplican la pena de muerte, el número de personas condenadas a muerte y el número de personas que han sido ejecutadas en el Estado parte. La pena de muerte, tal como se aplica en el Estado parte, es compatible con el artículo 6 del Pacto, porque se limita a los crímenes más atroces. El protocolo de revisión de causas castigadas con la pena capital se diseñó con objeto de que la pena de muerte solo se aplicase en los casos apropiados y de forma no discriminatoria. A nivel federal y estatal, todas las disposiciones legales sobre la pena de muerte han de guiar el criterio de la instancia enjuiciadora y han de restringir la clase de delincuentes que pueden ser castigados con la pena de muerte. Toda persona condenada tiene derecho a un examen individual de la aplicabilidad de la pena en su caso. Los jurados deben tener en cuenta las circunstancias atenuantes. El Departamento Federal de Justicia colabora con los estados para garantizar la disponibilidad y la capacitación de abogados defensores cualificados para ocuparse de los casos de delitos susceptibles de ser castigados con la pena capital.

40. Está expresamente prohibida la imposición de la pena de muerte por motivos relacionados con la raza. No obstante, la excesiva representación de afroamericanos en el corredor de la muerte constituye un motivo de preocupación que el Departamento de Justicia está analizando. El Fiscal General ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para estudiar las disparidades raciales en este contexto. En lo que respecta a los estupefacientes que se utilizan en las inyecciones letales, los tribunales federales intervienen cada vez más, en el ejercicio de su autoridad, para dirimir los problemas constitucionales que plantean los protocolos de ejecución de los distintos estados y el uso de determinados fármacos.

41. Existe un procedimiento de revisión de condenas y el número de personas que han sido exculpadas después de haber sido condenadas podría verse como una reivindicación del sistema judicial del Estado parte. Existen también disposiciones legislativas en el ámbito federal, en el distrito de Columbia y en 29 estados, que prevén la concesión de

indemnizaciones por condenas injustas. Con arreglo a la Ley Federal de Protección de la Inocencia, las personas que hayan sido injustamente condenadas a muerte tienen derecho a percibir 100.000 dólares estadounidenses por cada año que han estado injustamente encarceladas. Esta Ley también estipula que los Estados deberán indemnizar a las personas que hayan sido condenadas injustamente.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.